

LA JUNTA MILITAR CHILENA  
Y SU MODELO ECONÓMICO

VIVIANA LEDESMA DE LAPEYRA

*(Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta. Chile)*

## 1. LA JUNTA MILITAR Y SU MODELO ECONÓMICO

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, puso fin a la democracia chilena, al mismo tiempo que inició un nuevo período en la historia del país. Trajo consigo un proyecto de cambio fundamental de la sociedad chilena, pero esta vez de signo conservador.

No obstante, es un error atribuir a los militares, luego de efectuado el golpe, un grado uniforme de convicción ideológica o una visión muy clara de sus objetivos a largo plazo después que se lograra, a satisfacción suya, la destrucción inicial del antiguo régimen (lo que en sí consideraban una tarea de largo plazo).

Era obvio que se debían tomar medidas urgentes de estabilización económica y que el golpe sólo podía ser legitimado mediante la adopción de un modelo político y económico absolutamente nuevo y exitoso. La falta de consenso sobre el programa básico ayuda a explicar por qué el poder se personalizó tanto: la cohesión de las Fuerzas Armadas provenía de la estructura de mando más que del acuerdo sobre las medidas de gobierno.

Las doctrinas con las que los militares estaban más familiarizados eran las de la «*seguridad nacional*»: se las ha definido como una creencia en el concepto de Nación, como «esencia» «tradicción» o «espíritu» arruinado por la demagogia política, y amenazado por la agresión internacional; en la aceptación de desigualdades sociales como un orden natural; en la idea de gobierno autoritario y en una visión crítica de la democracia y en la definición del marxismo como el principal enemigo de la sociedad<sup>1</sup>.

Con ideas tan vagas como estas, las creencias autoritarias ayudan a explicar por qué los militares no sólo aceptaron derrocar a Allende, sino también construir una nueva sociedad en la cual las divisiones políticas

---

<sup>1</sup> GARRETÓN, Manuel Antonio: *El proceso político chileno*. Santiago, 1983.

serían reemplazadas por la acción común en favor de la grandeza nacional. El general Pinochet, de 58 años en el momento del golpe y con cuarenta en el ejército, era profesor de geopolítica<sup>2</sup>.

Los militares dejaron de lado su tradición constitucional e introdujeron sus valores en el ámbito político: jerarquía, disciplina y respeto al orden. Esto ayuda a explicar la personalización de la autoridad del régimen en manos de Pinochet, que difiere de la norma corporativa de los militares brasileños o del rechazo al personalismo en Argentina, Uruguay y Perú.

Pinochet demostró gran habilidad al dejar fuera de combate a sus potenciales opositores en el cuerpo de oficiales (como el general Leigh) y al designar subordinados leales en todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Como Jefe de Estado-Comandante en Jefe del Ejército, Pinochet concentró gran cantidad de poder, y luego de la ratificación de la nueva Constitución en 1980 se apoderó de una buena dosis de la autoridad simbólica de la presidencia<sup>3</sup>.

La creencia en tales nociones autoritarias, como las doctrinas de la seguridad nacional, generalmente se asocia con un aumento de las actividades y del papel del Estado, mientras que en Chile durante el gobierno militar sucedió exactamente lo contrario, debido a la conversión a las doctrinas económicas de la escuela monetarista de Chicago. Esto no obstante no se produjo de inmediato. Muchos oficiales se sentían atraídos al principio por una especie de integrista católico o concepto de estado corporativo. Su rechazo a los valores de socialismo y su admiración por el papel de los gremios los llevó a un fuerte sentimiento de corporativismo nacional, que se expresó a través de las influencias de teóricos reaccionarios como Jaime Guzmán. Dichas ideas se cristalizaron, en el plano político, en instituciones tales como el Consejo de Estado, establecido en 1975, el cual incluyó a connotados políticos.

Sin embargo, estas ideas no eran apropiadas para servir de base de legitimación del régimen. En primer lugar la Iglesia no simpatizaba con estas doctrinas reaccionarias (a pesar de que no se opuso abiertamente al

---

<sup>2</sup> Los demás miembros de la Junta Militar de Gobierno eran el Almirante José Toribio Merino, 57 años, otro especialista en Geopolítica; el General Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, al comienzo identificado con elementos neofascistas del Gobierno, pero más tarde removido por Pinochet por sus críticas en relación a materias de gobierno, y el General Director de Carabineros, General César Mendoza Durán.

<sup>3</sup> La Junta ejerció la función legislativa a través de los servicios de una serie de comités compuestos por civiles que desempeñaron una función vital en la formulación y determinación de las políticas. No obstante Pinochet mantuvo su propio grupo de asesores civiles, quienes cumplían sus funciones muy en secreto.

régimen sino hasta 1975). En segundo lugar, estas no iban a encontrar apoyo en grupos externos con los que el gobierno quería aliarse, sobre todo en los Estados Unidos y en el mundo de la banca internacional. El régimen deseaba la aprobación internacional, apoyo financiero e inversión. El flirteo con ideas fascistas no era el adecuado para ganar dicho apoyo (aunque sí lo era la militancia anticomunista). En tercer lugar, el corporativismo podría ser utilizado por grupos políticos ya existentes para maniobrar su regreso al poder y debilitar el monopolio que de éste tenían los militares. Pero lo más importante era que estas ideas ofrecían escaso consejo sobre la forma en que se debían manejar los problemas económicos. En este aspecto, las primeras medidas de gobierno –eliminación del control de precios y de los subsidios, rebaja de los salarios reales y reducción del déficit fiscal– no convencieron al país de que se podía controlar la inflación.

Un grupo de economistas chilenos con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Santiago y en Chicago, y con valiosa experiencia en el mundo político, comercial y empresarial (varios habían sido consejeros de Alessandri en la elaboración del programa para la campaña presidencial de 1970), se habían estado reuniendo desde 1972 para preparar el programa de un nuevo gobierno de tendencia derechista. Hasta julio de 1974 el Ministro de Hacienda fue un oficial naval, posteriormente asumió el primero de los tecnócratas, Jorge Cauas (quien más que un «Chicago Boys» era un consejero del PDC). En el Ministerio de Economía, el empresario Fernando Leniz tenía como asesor a Sergio de Castro, quien lo reemplazó en abril de 1975. De Castro era un monetarista convencido y una autoridad en materia económica. El dominio de la escuela neoliberal fue completo y su primer plan fue el shock económico de 1975. ¿Por qué sus ideas resultaron tan atractivas para los militares? (quienes estaban lejos de ser liberales), y ¿Por qué duró tanto su influencia?

El proyecto que los economistas de Chicago ofrecieron a los militares significaba la reestructuración completa de la economía, de la sociedad y del sistema político. No sólo se modificaría lo realizado por la Unidad Popular, sino la conducción completa de la política chilena desde los años treinta. Tal transformación únicamente podía lograrse bajo estricto control autoritario, para eliminar las distorsiones producidas por el populismo y crear las condiciones apropiadas en las cuáles pudieran operar las fuerzas del mercado. La reducción del sector público eliminaría la base de las presiones sectoriales o populares por concesiones gubernamentales; la reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales robustecería el respaldo a las políticas militares y castigaría a las fuerzas que se le opusieran.

La apertura de la economía al libre mercado proporcionaría los medios para poder crecer, sin que hiciera falta apoyo estatal a sectores no competitivos. Permitir que el nivel de los sueldos fuera regulado por las fuerzas del mercado debilitaría el poder de negociación política del movimiento sindical. Todos estos elementos se combinarían para eliminar uno de los mayores propagadores de intranquilidad social: la inflación. La belleza de esta solución era que el mecanismo regulador sería el más liberal de los conceptos: el libre juego de las fuerzas del mercado<sup>4</sup>. Al mismo tiempo, se erosionarían las antiguas formas de lealtad política y se desarrollarían otras nuevas, nacionales, sin distinción de clase.

El monetarismo ofrecía una nueva utopía en contraste con los fracasos del pasado, y la respuesta de una utopía podría «usarse para justificar la brutal represión» que surgió del golpe militar.

La nueva ortodoxia económica atrajo a los militares porque ofrecía coherencia y disciplina y se la percibía como técnica y científica y, por lo tanto, ideológicamente neutral. Una vez en marcha el proceso iba a ser irreversible y, como medida necesario para la salvación nacional sus premisas no se iban a poner en duda. Los «Chicago Boys» se ocuparon de la dirección económica y el proyecto militar se puso en manos de los gremialistas.

La forma cómo los ideólogos de la derecha reaccionaria tradicional han podido entenderse con los defensores de la escuela económica del libre mercado es realmente una extraordinaria proeza de acrobacia ideológica.

Es posible apreciar la conveniencia de este acuerdo: los tradicionalistas se encargaron de los asuntos políticos del régimen de Pinochet y los «Chicago Boys» del manejo económico. También es posible ponderar el hecho de que ambos grupos proceden de la Universidad Católica de Santiago; de promociones de los años cincuenta y sesenta. Pero, desde el punto de vista lógico sigue siendo un enigma que dos ideologías tan disímiles pudieran pretender un tal alto grado de unanimidad política. Pero, el presidente Pinochet estaba mucho más interesado en el poder político que en la coherencia ideológica, y los nuevos arreglos eran una justificación perfecta para un período prolongado de autoritarismo político.

Muchos sectores iban a encontrar poco gratas las nuevas medidas económicas. Sin embargo, los grupos empresariales aceptaron que la austeridad y la competencia eran el precio necesario que había que pagar para

---

<sup>4</sup> La crítica más abierta a la política económica del Gobierno proviene de los economistas de CIEPLAN entre los que destacan Alejandro Foxley y Ricardo French-Davis.

evitar que se repitiera el pasado. Por su parte, algunos miembros del sector medio aceptaban gustosos cualquier medida que restituyera el orden y la disciplina, y las promesas de largo plazo de los «Chicago Boys» eran atractivas. De este modo, el gobierno del general Pinochet no sólo se basó en el Ejército y en la represión sino también en el apoyo de grupos numerosos e influyentes de la sociedad civil. El diagnóstico a que habían llegado los Chicago Boys era en primer lugar que Chile, desde la gran crisis de 1930 y hasta 1970, había tenido un crecimiento ínfimo, con tasas tan bajas que el país necesitaba medio siglo para poder doblar el ingreso per cápita<sup>5</sup>. Este bajo rendimiento económico, afirmaban, es lo que ha causado los problemas políticos y lo que ha obligado al país cada seis años a ensayar una receta distinta, sin por eso encontrar la solución. Para salir de este marasmo es necesario aumentar la tasa de crecimiento, mediante políticas eficientes. Es así como Chile, bajo Augusto Pinochet y los «Chicago Boys» se transformó en una especie de laboratorio donde se aplicaron sistemáticamente políticas neoliberales<sup>6</sup>.

## 2. LOS TRES PUNTOS CLAVES DEL PROGRAMA ECONÓMICO

El primer punto que a los autores del programa parecía básico era la apertura al exterior, para la que preconizaban una rebaja general de los aranceles, la adopción de un cambio fijo, y el abatimiento de todas las barreras que obstaculizaban el libre flujo de bienes y servicios.

Se formuló un nuevo código de inversiones en un intento por atraer capitales extranjeros.

El segundo criterio fundamental era el de proclamar el papel subsidiario al Estado; dicho de otra forma, se debía facultar al mercado para que haga cuanto pueda hacer y reservar a la autoridad la facultad de cautelar las actividades en las cuáles el mercado no opera (monopolios naturales) e igualmente, velar porque la actividad privada se desenvuelva dentro del bien común<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> VALDIVIESO, Rafael: *Crónica de un rescate*. Chile, 1973-1988, pág. 34.

<sup>6</sup> GARCÍA, Rigoberto (ed.): «Chile 1973-1984». Institute of Latin American Studies, *Monographs*, núm. 12, Stokholm, 1985.

<sup>7</sup> La aplicación del principio de subsidiariedad del Estado fue algo trascendental en la consolidación del régimen militar. Este principio fue señalado desde un comienzo en los documentos emanados de la Junta de Gobierno, como, en la Declaración de Principios y más tarde consagrado como norma jurídica en la Constitución Política del Estado el año 1980 en su artículo 19, núm. 11.

En efecto, el Estado toma el cargo de mero vigilante, protector, auxiliador, orientador y cooperador de ciertas iniciativas provenientes de ciertos grupos de particulares. Por último el Estado puede y debe actuar directamente en tres circunstancias:

- A) Cuando se trate de actividades en que los particulares no estén en situación de cumplirlas.
- B) Cuando los particulares no cumplan adecuadamente con las tareas que les corresponde, y
- C) Tratándose de tareas que los particulares estarían habilitados para cumplir, pero que por razones de seguridad nacional es preferible que las acometa el Estado. Por ejemplo la producción de explosivos, o de armamento especializado.

La aplicación de este principio tuvo como punto más importante la privatización del área social, iniciada a fines de 1973. Un primer grupo de 115 grandes unidades productivas del área social fueron oficialmente reintegradas a capitalistas chilenos y extranjeros el 6 de diciembre, entre ellas Electromat (estadounidense, artículos electrónicos); Ceresita (alemana, pinturas); AGA (sueca, acetileno y oxígeno industrial); Cobre Cerrillos (norteamericana, asociada a la Pheeps Dodge); Pizarreño (belga; planchas de concreto); Isesa (suiza, esmeriles); y Crowncork (estadounidense, bronce), más seis empresas distribuidoras cinematográficas norteamericanas. Entre las empresas nacionales devueltas figuran metalúrgicas, aceiteras, textiles, conservas, de vidrio, pinturas pesqueras, electrónicas, lecheras, de bebidas gaseosas y productoras de artículos hogareños. Otros centenares de empresas menores correrán la misma suerte<sup>8</sup>. Debido a esto<sup>9</sup>, «La Corfo, que agrupaba a modo de superministerio 553 empresas económicas estatizadas, tendrá como función, a partir de este momento, propiciar toda la industria chilena, incluyendo la privada»<sup>10</sup>.

El proceso de privatización del sector productivo fue particularmente espectacular a partir de 1975, cuando muchas empresas estatales fueron vendidas a conglomerados económicos, antiguos o emergentes que adquirieron gran importancia<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Revista *Triunfo*. Núm. 597, 9 de marzo de 1974, «Chile: Retorno al Capitalismo Dependiente», pág. 18.

<sup>9</sup> *La Tarde*. 11 de septiembre de 1973, «Proclama de las Fuerzas Armadas». Pág. 1.

<sup>10</sup> RAMAS, Eduardo: *Chile, 1.000 días entre la revolución y el Fascismo*. Ob. cit., pág. 181.

<sup>11</sup> Dos de ellos, Vial y Cruzat, serían intervenidos por las autoridades en 1983.

La idea central fue fomentar la competencia y la eficiencia y hacer que todas las empresas resultasen tan rentables como fuese posible y llegaran al autofinanciamiento.

Sin embargo no todas las empresas estatales fueron vendidas, algunos sectores muy importantes como la gran Minería del Cobre se mantuvieron en manos del Estado. Tal decisión, fue tomada por la Junta de Gobierno, de acuerdo a las declaraciones del almirante Huerta (Ministro de Exterior) como una manifestación de «respeto al deseo expresado por toda la ciudadanía, que por unanimidad aprobó la nacionalización de los centros mineros»<sup>12</sup>. No obstante se establecieron conversaciones oficiales –a nivel de cancillerías– con las antiguas compañías dueñas de las minas de cobre chilenas, con el fin de establecer el pago de las indemnizaciones que correspondan. En marzo y julio de 1974, las nuevas autoridades del sector de la Gran Minería llegaron a acuerdos con la Cerro Corporation y la Anaconda Cooper Co., en relación con los procesos de normalización de las actividades de la Compañía Minera Andina y de la Compañía de Cobre de Chuquicamata, la Compañía Minera Exótica y la Compañía de Cobre el Salvador. Estos acuerdos fueron los que, prácticamente, emitieron liquidar la situación de juicios y embargos pendientes con EE.UU., a raíz de las expropiaciones sin pago que, durante el gobierno de Salvador Allende, se habían hecho de las mencionadas minas.

El 11 de abril de 1976, mediante el decreto núm. 1.350, fueron disueltas las compañías de cobre Chuquicamata, El Salvador, Exótica y la Sociedad Minera El Teniente y se creó la Corporación Nacional de Cobre de Chile más conocida como CODELCO-Chile, como empresa propiedad del Estado encargada del manejo de la gran minería.

Es importante destacar que los criterios de manejo de las empresas estatales de la administración pública y la política económica en general cambiarán profundamente después del golpe militar. El tamaño del Estado siguió siendo bastante grande, incluso en los años de aplicación más estricta del modelo liberal, pero en un sentido cualitativo hubo una especie de privatización del sector público con un mayor acento en la competencia, la rentabilidad, el autofinanciamiento y la acomodación pasiva a las reglas del juego del mercado.

El tercer punto fue la puesta en marcha de una nueva política social, que según las autoridades, se concentraría en la erradicación de la extrema pobreza.

---

<sup>12</sup> *El Mercurio*. 28 de septiembre de 1973. Cuerpo C, pág. 1.



## 2.1. LA ECONOMÍA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL GOBIERNO MILITAR

Para poder atacar la inflación, la escasez, el déficit fiscal y de la balanza de pagos, se aplicó un programa tradicional y conservador de estabilización económica cuyos principales ingredientes fueron:

1. Una disminución de los gastos públicos y del déficit presupuestario que bajó desde el 24% del PGB en 1973 al 8% en 1974.
2. Una baja, en más de un 30%, de los sueldos y salarios reales entre 1973 y 1974.
3. Un intento de contracción monetaria que trajo consigo una menor liquidez en la economía.

Paralelamente a esta política de austeridad se abolieron casi la totalidad de los controles de precios y mercados introducidos durante la Unidad Popular, lo que produjo como efecto la eliminación del desabastecimiento.

Conjuntamente, los tipos oficiales de cambio, que eran alrededor de seis, fluctuando entre los 25 y los 1.300 escudos por dólar, se sustituyeron por tres, uno de los cuales, el de 110 escudos se estableció para ciertas exportaciones de cobre; el de 850 escudos para operaciones de tipo marginal y el de 280 escudos, que era casi el más importante, para casi la totalidad de las transacciones.

Por su parte, la producción en general se regularizó por el fuerte control oficial y la vuelta a la «disciplina laboral». Sin embargo, persistió un importante desabastecimiento de materias primas, a raíz de la carencia de inventarios y la insuficiencia en materia de divisas.

La tasa de interés fue fijada a un nivel negativo, en términos reales, consultándose bonificaciones salariales para los meses de noviembre y de diciembre, además de un reajuste general en el mes de enero de 1974, para el sector privado, del orden del 400%. Además, se diseñó una escala única de remuneraciones para el sector público, con más de 200 sistemas diferentes, con un reajuste inferior al otorgado al sector privado.

Tanto el salario mínimo como las asignaciones familiares subieron notablemente y, durante 1974, se otorgaron varias ayudas y reajustes de remuneraciones con el fin de mantener el poder adquisitivo promedio del año anterior.

También durante ese mismo año se hicieron cambios significativos en el manejo del aparato fiscal y público normalizándose las finanzas, y se confeccionó un presupuesto ordenado y coherente, que permitiría el control del aparato público. Se hizo, asimismo, una reducción del número de funcionarios y de los subsidios incrementándose la inversión en el sector.

Con respecto al sector financiero los bancos que habían permanecido bajo el control estatal, comienzan a liberalizarse paulatinamente.

El crédito comenzó a regularse por vía del encaje<sup>13</sup> eliminándose el control cuantitativo mensual para cada banco. Al mismo tiempo, se redujeron los créditos selectivos del Banco Central y se trató de mantener, de acuerdo con la inflación.

En lo concerniente a la renegociación de la deuda externa, se estableció un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, un programa extraordinario agrícola y de construcción y, en general, un aumento de la inversión, que a fines de 1974 se convirtió en un lastre debido a la crisis petrolera.

En general, el resultado de esta primera política económica de estabilización fue de fracaso. La producción aumentó algo en el curso de 1973, pero la inflación alcanzó en 1974, casi el 370%. El déficit fiscal disminuyó, pero no tan rápidamente como el gobierno habría deseado. El déficit en la cuenta corriente aumentó en 1974 en más de 200 millones de dólares, casi tanto como en 1973. La cesantía aumentó en forma espectacular. La siguiente tabla nos muestra los principales indicadores económicos del período:

**Tabla núm. 1: Índices económicos (años 1974-1977)**

	<b>Inflación (% anual)</b>	<b>Desempleo (% de la F. de T.)</b>	<b>PIB (tasa de crecimiento anual)</b>
1974	369	9	5,5
1975	343	16	-12,9
1976	198	20	3,5
1977	84	19	9,9

*Fuente:* CÁCERES y TAPIA (1985): 1973-1984. *Un caso de política económica.* Mineo U. Adolfo Ibáñez. Doc. de trabajo núm. 1.

Aún a mediados de 1975 no se perfilaba ninguna mejoría por lo que el gobierno decidió aplicar un plan de *shock*.

<sup>13</sup> La proporción de los depósitos que los bancos guardan como reserva se denomina encaje. Hay un encaje mínimo que los bancos deben guardar por disposición de la autoridad monetaria. Mientras más alto es el encaje mínimo, menor es la cantidad de cada depósito que los bancos pueden prestar y, por lo tanto, menores serán los depósitos adicionales que los propios bancos pueden generar con sus préstamos. Por el contrario, una reducción del encaje permite a los bancos prestar más y, como consecuencia, aumentar los depósitos y el dinero existente.

Este nuevo plan no era más que una más drástica aplicación de las medidas anteriores. Así, todo el sector público recibió órdenes de disminuir el personal en un 15%, la política monetaria se contrajo aún más y los salarios reales bajaron a un nivel cercano al 62,9% de 1970.

El gasto real del gobierno se redujo en un 27% en 1975 y el déficit fiscal cayó de un 8,9% del PNB a un 2,9%, los aranceles a las importaciones bajaron de un promedio de 70% a mediados de 1974 a un 33% a mediados de 1976. El crédito se restringió y la tasas de interés real que ya eran altas subieron de una 49,3% anual a un 178% a fines de 1975. La inversión pública disminuyó a la mitad. El producto nacional bruto bajó casi un 15% en comparación con 1974. La producción industrial cayó en un 25%. La tasa de desempleo subió de un 9% en diciembre de 1974 a un 16% en el mismo mes de 1975. El déficit en la cuenta corriente se duplicó alcanzando la cifra récord de 491 millones de dólares, especialmente como consecuencia de los bajos precios del cobre<sup>14</sup>. No obstante, la inflación reaccionó con lentitud y se mantuvo en un 343% en 1975.

Se decidió, además, un aumento de los impuestos con el fin de contribuir al equilibrio fiscal y, concretamente, se subió en un 10% el impuesto progresivo a la renta; se aplicó una sobretasa de la misma magnitud al consumo «suntuario», se eliminaron casi por completo las exenciones al impuesto al valor agregado. Además, se anunció una retasación al impuesto a los bienes raíces no agrícolas, un mayor control tributario, y sanciones ejemplarizadoras para quienes evadieran impuestos o contribuciones a la seguridad nacional.

Estas medidas tampoco tuvieron frutos inmediatos. Una de las explicaciones que se da a este mal resultado económico es que entre los años 1974 y 1975, las empresas reaccionaron ante la caída de la demanda, disminuyendo la producción en lugar de los precios.

Los economistas del régimen estaban empeñados en disminuir los costos de trabajo por unidad de producción, pero lo irónico fue que mientras los salarios disminuían, las tasas de interés aumentaron tanto que el efecto inmediato del paquete restrictivo, fue un fuerte aumento de los costos totales de producción.

El año 1976 puede ser caracterizado como un año de transición. El desarrollo por fin se dirigió en el sentido esperado, aunque lentamente la inflación disminuyó a un 198% y el déficit presupuestario más aún, a sólo el 2% del PGB. La producción aumentó algo, 3.5%. El punto más lumino-

---

<sup>14</sup> El precio promedio histórico ha sido de aproximadamente US\$ 1,25 la libra, pero después de 1975 éste bajó a US\$ 0,65 centavos la libra.

so era la Balanza de Cuenta Corriente que entonces, como consecuencia de la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones, mostraba excedentes de alrededor de 148 millones.

## 2.2. *PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1977-1981*

Entre agosto de 1977 y el primer semestre de 1981 pareció que la economía chilena estaba andando bien, incluso en círculos internacionales se comenzó a hablar del **milagro económico chileno**.

La inflación bajó y se mantuvo entre un 30 y 40% aproximado, lo que ya significaban cifras manejables y tanto las exportaciones como el PGB crecieron a una tasa respetable. El déficit fiscal se convirtió en excedente. Incluso la producción industrial se recuperó. Los avances más importantes se produjeron en la descentralización y en el manejo subsidiario y racional del sistema público. Fue trasladado al sector privado una parte sustancial del aparato productivo; previamente estatizado, creándose un marco legal, que permitió el desarrollo, sin precedentes, de la intermediación financiera. Se vendieron numerosos bancos, con la excepción del Banco del Estado y se instalaron numerosas agencias y sucursales de la banca internacional.

Se produjo, al mismo tiempo, un desarrollo sin precedentes en el campo de los seguros, surgiendo una gama de intermediarios financieros modernos resolviéndose la virtual falencia del sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, se redujo su tamaño y se llevó a cabo una reforma previsional que centralizará el manejo de los enormes fondos de los trabajadores. Surgieron numerosos instrumentos de ahorro y financiamiento de las empresas y se modernizó y fortaleció la acción de la Superintendencia de Bancos, sociedades financieras y sociedades anónimas. Hubo una fuerte expansión en la industria y sobre todo en la construcción (supermercados, caracoles, restaurantes, hoteles de lujo, etc.).

Conjuntamente se distribuyeron las tierras y se fortaleció el derecho de propiedad en general, y en la minería y en la agricultura en particular. Aproximadamente un tercio de las tierras fue devuelta a sus antiguos dueños, pero, a pesar de que se asignó casi el 40% de la tierra a los campesinos que la trabajaban, cerca del 60% de ellos se vio forzado a venderla, pues no tenían acceso a la asistencia técnica ni al crédito.

En la agricultura el desempleo fue significativamente superior al de décadas anteriores, en 1980 los salarios habían bajado a niveles similares a los de 1965. El apoyo estatal a la actividad agrícola se redujo en forma drástica, a excepción del que se daba al sector exportador rentable.

Al retirarse el Estado de muchas áreas en las que antes había jugado un papel importante, el gasto fiscal como porcentaje del PNB bajó de un 29,1% en 1972 a 19,7% en 1978. Hubo una reducción significativa del gasto social per cápita en educación, salud, previsión social y vivienda. Buena parte de la gestión en la educación se trasladó a los municipios, y lo propio, aunque en menor grado ocurrió con los servicios de salud.

Los tecnócratas responsables de la economía estaban convencidos de que el Estado desempeñaba un papel demasiado importante. Su intención era reducir lo más posible la participación del Estado mediante la venta de las empresas que éste poseía. Aparte de las que habían sido intervenidas durante el gobierno de la Unidad Popular en 1973, el Estado tenía la propiedad, a través de la CORFO, de poco más o menos 300 empresas. En 1980 esta cifra había bajado a 24, y la mitad de ellas estaba en proceso de traspaso a particulares. Había alrededor de otras 12 empresas estatales que dependían de organismos fiscales diferentes de la CORFO, entre las que se encontraban empresas petroleras y cupreras. La venta de activos se efectuó en condiciones extremadamente favorables para los nuevos propietarios.

En vista de las altas tasas de interés internas, quienes pudieron adquirir bienes fiscales fueron los grandes grupos económicos del sector privado, que tenían acceso a fondos extranjeros y a tasas de interés significativamente menores que las domésticas. Por otra parte, el Estado entregó un subsidio importante (equivalente a cerca del 40 o 50% del precio de la compra) a los ricos y poderosos para que tomaran posesión de sus activos<sup>15</sup>.

De este modo, los partidarios de la economía de libre mercado agudizaron la concentración económica en Chile. Unos pocos grupos multisectoriales dominaron el sector industrial, el financiero, el bancario y el de exportación agrícola. El acceso de estos grupos a las finanzas internacionales les significó ventajas y beneficios extraordinarios. Se estima que entre 1977 y 1978 los conglomerados más importantes tuvieron utilidades de alrededor de 800 millones de dólares por el sólo hecho de conseguir préstamos en el extranjero y dar créditos en el país, a tasas que fluctuaban entre un 100% en 1976 y un 30% en 1978, por sobre las internacionales<sup>16</sup>. Estas utilidades fueron muy superiores a los montos pagados por las empresas estatales y por los bancos que se vendieron al sector privado.

---

<sup>15</sup> No obstante hay que reiterar que los militares se negaron a vender bienes fiscales que consideraron estratégicos, como es el caso de las compañías mineras de cobre.

<sup>16</sup> GARCÍA, Rigoberto (comp.): *Economía y Política durante el gobierno militar en Chile (1973-1987)*. Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 76.

Un estudio de Fernando Dahse reveló que, a fines de 1978, cinco grupos económicos controlaban el 53% de los bienes de las 250 empresas privadas chilenas de mayor envergadura y ellos, junto a otros cuatro, manejaban el 82% de los activos y el 60% de los créditos del sistema bancario, además del 64% de los préstamos otorgados por instituciones financieras<sup>17</sup>. Los grupos crecieron vertiginosamente y obtuvieron ganancias insospechadas a causa de que los bancos extranjeros –atraídos por las altas tasas de interés en Chile– estaban deseosos de dar créditos a corto plazo, en el entendido de que la suerte económica del gobierno estaba tan ligada al modelo Chicago, que el cumplimiento de los compromisos internacionales tendría primera prioridad, aun cuando hubiera recesión.

Pese al crecimiento vigoroso de las exportaciones, también en este subperíodo se incrementan a un fuerte ritmo las importaciones. Ello fue acumulando un fuerte déficit en la cuenta corriente que en el año 1980 alcanzó 2.000 millones de dólares. Éste fue financiado con un ingreso de préstamo de la banca extranjera.

Desde junio de 1979 el tipo de cambio nominal había sido fijado en 39 dólares con el objeto de vencer la inflación. Su nivel se mantuvo durante varios años, hasta que en junio de 1982, después de una caída de 800 millones de dólares en las reservas en cinco meses se decidió su devaluación.

El término del ciclo de bonanza se manifestó con una caída del PIB en un 14% respecto del año anterior. El desempleo abierto alcanzaba el 26% de la fuerza de trabajo (incluyendo los programas de emergencia para absorber la cesantía, PEM –Plan de empleo mínimo– y POJH –Programa de ocupación para Jefes de Hogar–).

La tasa de inversión (privada, estatal o extranjera) siguió muy baja en relación con los niveles anteriores. Las altas tasas de interés real que imperaban en esta época desalentaban la inversión y favorecían la especulación. Incluso el vital sector del cobre necesitaba con urgencia de nuevas inversiones para elevar su producción.

La rebaja arancelaria golpeó duramente a la industria nacional y las quiebras llegaron a cifras récord. Las nuevas importaciones correspondían en su mayoría a artículos suntuarios y no a bienes de capital o maquinarias, imprescindibles para mantener los niveles de producción industrial.

---

<sup>17</sup> DAHSE, Fernando: *El mapa de la extrema riqueza*. Santiago de Chile, 1979. La proporción de recursos financieros depositados en instituciones privadas aumentó de un 11% en 1970 a un 64,7% en 1979.

El costo social del experimento fue elevadísimo. Los salarios reales escasamente equivalían a tres cuartos de los de 1970 (más aún, en 1981 su nivel fue inferior a los de 1970). El desempleo se elevó a cifras inusitadas, nunca inferiores al 15,6%. La distribución del ingreso se deterioró en una medida considerable, la mayoría de la población estaba peor que diez años antes.

La estructura del empleo también cambió. Entre 1970 y 1980 el número total de obreros disminuyó en un 22%, cifra que no alarmó en absoluto a un gobierno que se oponía al desarrollo de un movimiento sindical poderoso. En el mismo período, el nivel de empleo del sector informal creció en un 13%.

Algunas de la magnitudes importantes del período se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla núm. 2: Índices económicos años (1978-1981)**

Año	PIB (crecimiento anual)	Desempleo (% de la F. de T.)	Inflación (% anual)	Exporta- ciones (US\$ MM)	Importa- ciones (US\$ MM)	D. Externa (US\$ MM)
1978	8,2%	17,9	37,2	2.460	2.886	11.251
1979	8,3%	17,7	38,0	3.834	4.190	12.353
1980	7,8%	15,7	31,2	4.705	5.469	13.999
1981	5,5%	15,6	9,5	3.836	6.513	17.856

*Fuente:* Banco Central, CIEPLAN.

### 2.3. LA CRISIS: 1982-1984

En el año 1982 comienzan a manifestarse en Chile claros síntomas de recesión, provocada a nivel internacional por la subida de los precios del petróleo y a nivel interno por la crisis del modelo neoliberal que se estaba aplicando. Chile se ve especialmente afectado por esta recesión debido a una importante baja en los precios de sus productos de exportación, y al mantenimiento de los precios de sus productos de importación. Esto, obviamente, provocó fuertes desajustes en la cuenta corriente que en el año 1981 era de 4.800 millones de dólares, o casi cien millones más que las exportaciones totales.

Todo esto se vio agravado por la política monetarista que desde el año 1979 fijaba el tipo de cambio en 39 pesos por dólar, en circunstancias en las cuales la inflación doméstica era mucho más alta que la inflación internacional, lo que significaba que la competitividad de la economía chilena

se deterioraba rápidamente. El problema de la sobrevaluación del dólar se agravó con la revaluación del dólar estadounidense —y por ende del peso chileno— frente a todas las otras monedas del mundo y con la baja de los aranceles en Chile.

El tipo de cambio congelado, y la apertura indiscriminada hacia el exterior, era una bomba de tiempo que tarde o temprano tendría que estallar. La obsesión gubernamental con la tasa de inflación significaba que la política del comercio exterior, incluyendo la política de cambio, fue subordinada al objetivo antiinflacionario, a un precio altísimo en términos de la producción industrial, agrícola, empleo y endeudamiento.

Como resultado de la política seguida por el gobierno, la deuda externa de Chile superó los 15 millones de dólares en 1981, y los 19 millones a fines del año 1983, lo que colocó a Chile como uno de los países con mayor deuda externa por habitante del mundo. Al mismo tiempo, las tasas de interés en el mercado de capital internacional, y con ellas el servicio de la deuda externa también habían aumentado rápidamente.

En 1982, el 81% de los ingresos de exportación de Chile se destinaron al pago de interés y amortizaciones de la deuda. De ahí en adelante, Chile necesita transferir más del 5% del PGB anualmente hacia el exterior sólo en pagos de intereses de la deuda externa, de las amortizaciones, mejor ni hablar.

Durante mucho tiempo, el gobierno confió en el famoso «ajuste automático». El único problema que afectaba a la economía chilena, afirmaban los economistas del gobierno, era la recesión internacional, cuyos efectos nefastos (baja en el precio del cobre principalmente) habían producido un desajuste entre los gastos y los ingresos del país. Gracias al tipo de cambio fijo y a la política monetaria neutra, el déficit de la cuenta corriente y la menor disponibilidad de créditos externos para cubrir el déficit tendrán que producir una menor liquidez interna, ya que la única fuente de emisión monetaria era, supuestamente, el superávit de la balanza de pagos, producto de la inundación anterior de préstamos internacionales.

La austeridad monetaria, a su vez, produciría un aumento de la tasa de interés, una menor demanda interna, rebajas de sueldos y salarios y después del pequeño ajuste recesivo, un equilibrio macroeconómico tanto interno como externo.

El único obstáculo que podía poner en peligro el ajuste automático era, en la opinión de los economistas del gobierno, la rigidez hacia abajo de los sueldos y salarios. Ya a mediados de 1981 lanzaron una fuerte campaña para eliminar el piso de Plan Laboral, es decir, el reajuste auto-



mático de las remuneraciones nominales de acuerdo con los aumentos del índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según los economistas de Chicago, el desempleo es un fenómeno microeconómico, producto de remuneraciones demasiado altas y/o distorsionadas en la estructura salarial. El ajuste automático podía pues expresarse de dos maneras distintas: o los trabajadores aceptaban una rebaja de los salarios, o una mayor cesantía. Como se verá más adelante las dos cosas se produjeron en forma brutal entre 1982-1983.

La política económica durante la fase de ajuste automático, que duró hasta la devaluación del peso en junio de 1982, no fue sin embargo pasiva por completo. A pesar de los consejos recién citados, de no hacer nada, el gobierno puso en práctica una política fuertemente contractiva. A través de pagos adelantados de la deuda externa pública, se produjo una menor liquidez en la economía y la contracción monetaria fue reforzada por una disminución de los créditos extranjeros. Una rígida política de austeridad fiscal, con aumentos de los impuestos y rebajas en los gastos fiscales, acentuó la caída de la demanda.

Uno de los resultados de esta política económica neutra fue una rápida alza de la tasa de interés interna. En septiembre de 1981 la tasa de interés real de los préstamos bancarios superó el 4% mensual, y en diciembre del mismo año había llegado al 5% mensual. Se estaba de regreso a las altísimas tasas de interés de los años 1976-1978.

La falta de competitividad internacional de la economía chilena, la caída de la demanda interna y las astronómicas tasas de interés real, más factores psicológicos, como la pérdida generalizada de la credibilidad del modelo hasta en los sectores más conservadores del país condujeron a Chile en 1982, a la peor crisis económica de los últimos cincuenta años. Al respecto, los datos presentados a continuación son elocuentes:

**Tabla núm. 3: Producto geográfico bruto semestral según actividad económica, 1981-1983 (porcentaje de cambio en comparación con el mismo semestre del año anterior)**

Actividad	1.º Sem.	2.º Sem.	1.º Sem.	2.º Sem.	1.º Sem.	2.º Sem.
	1981	1981	1982	1982	1983	1983
Agricultura	2,7	7,0	1,6	-10,8	-4,6	-2,1
Pesca	18,6	17,7	28,2	-9,5	8,7	9,8
Minería	8,1	7,8	9,5	2,2	-5,4	1,3
Industria	6,9	-1,5	-21,3	-21,9	-4,9	5,5
Electricidad, gas y agua	3,5	0,6	0,4	-0,8	3,7	5,2

**Tabla núm. 3: (Continuación)**

Actividad	1.º Sem.	2.º Sem.	1.º Sem.	2.º Sem.	1.º Sem.	2.º Sem.
	1981	1981	1982	1982	1983	1983
Construcción	27,0	15,6	-23,8	-34,3	-17,8	4,6
Comercio	12,8	1,6	-13,3	-23,6	-14,9	6,5
Transporte	2,3	0,0	-5,2	-14,3	-6,8	1,1
Otros	5,1	5,7	-11,5	-16,5	3,4	4,8
Total PGB	7,8	3,7	-10,8	-17,8	-7,0	4,2

*Fuente:* Banco Central, Cuentas Nacionales trimestralizadas, 1980-1984.

Con la eliminación, a mediados de 1982, del «piso» de sueldos y salarios establecidos en el Plan Laboral Original, la rigidez hacia abajo de las remuneraciones reales también fue eliminada. Contrariamente a los supuestos de los «Chicago Boys», la rebaja de los sueldos fue acompañada de un fuerte aumento de la cesantía. La magnitud de los efectos sobre el nivel de vida de los trabajadores puede examinarse en la siguiente tabla:

**Tabla núm. 4: Indicadores del nivel de vida de los trabajadores, 1981-1982**

Indicadores	1981	1982	Variación (%)
a) Disponibilidad de bienes por persona	100,0	73,7	-26,3
b) Producto per cápita	100,0	84,5	-15,5
c) Ocupación (número de personas ocupadas)	3.271.000	2.824.500	-13,7
d) Desocupación (número de personas desocupadas)	417.700	679.100	+62,9%
e) Ocupados en el PEM	173.619	303.534	+74,8
f) Desocupación total (incl. PEM)	591.319	982.634	+66,2
g) Tasa de desocupación sin PEM	11,3%	19,4%	71,7%
h) Tasa de desocupación con PEM	16,0%	28,0%	+75,0%
i) Ingreso familiar mínimo	100,0	91,0	-9,0
j) Índice de sueldos y salarios reales	100,0	87,9	-12,1

*Fuente:* VEGA, Humberto: *La política económica y la situación de los trabajadores*, PET/Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1983.

A la crisis en la agricultura, la industria y la construcción, y los altos costos sociales hay que agregar una serie de escándalos financieros que sacudieron al país a partir de 1981. El sector financiero fue el corazón del modelo desde 1973, y llegó a principios de la década de los ochenta a tener una participación sectorial en el PGB dos veces más alta que la agricultura, pero la fragilidad de la economía especulativa que se erigió alrededor de un pequeño número de centros financieros se hizo evidente en noviembre de 1981 cuando el gobierno se vio obligado a tomar el control de cuatro empresas financieras y cuatro bancos cuyas pérdidas se acercaban a los 400 millones de dólares.

La intervención estatal en estas instituciones fue una de las primeras desviaciones del extremo liberalismo, pero la medida se estimó como necesaria para evitar un fracaso de mayores proporciones y para demostrar a los acreedores extranjeros que el Estado estaba dispuesto a intervenir y garantizar las deudas bancarias externas. Poco más de un año después, el sector público —o sea, el pueblo chileno— tuvo que hacerse cargo de todas las deudas privadas del país, como condición de la banca internacional para otorgar un sólo préstamo más a Chile.

Durante algún tiempo la crítica situación de muchas empresas fue ocultada mediante la renegociación de los préstamos bancarios. Pero, cuando el flujo de créditos extranjeros se redujo, ya no fue posible seguir negociando todos los créditos, y el alza de la tasa de interés hizo que la situación llegase a ser insostenible para un creciente número de empresas.

Muchos deudores no pudieron pagar, las quiebras del sector productivo se multiplicaron y esto obligó a los bancos a incorporar muchos préstamos en sus carteras vencidas. El pago no era al contado, sino en pagarés reajustables que las entidades financieras se comprometieron a «recomprar» en un plazo de 10 años. En el fondo, se trataba de dar un aval estatal a los dueños de los bancos y a los depositantes.

En enero de 1983 se produjo otro infarto del modelo, cuando el entonces Ministro de Hacienda y Economía Rolf Lüders, anunció que el gobierno tenía que decretar la intervención de dos bancos importantes: El Banco Unido de Fomento y el BHC, del grupo de Javier Vial (el ex-vicepresidente del BHC había sido el bi-ministro Lüders). Además se decretó la liquidación de la Financiera Ciga, y se designaron administradores delegados de la Superintendencia de Bancos en cinco bancos del país. La operación significó que la intervención estatal ya había llegado a superar el 60% de la banca nacional, en términos de capital y colocaciones. El desarrollo del sistema financiero durante la crisis de 1981 y 1982 aparece resumida en la siguiente tabla.

**Tabla núm. 5: Desarrollo del sistema financiero (1981-1983)**

Fecha	Utilidad (o pérdida) acumulada	Cartera vencida	Cartera vencida del banco Central	Total Cartera mala	Cartera mala como % de capital más reservas
1981 dic.	5.796	16.831	—	168.311	22,8%
1982 mar.	1.138	31.232	—	31.232	—
1982 jun.	2.749	45.537	—	45.537	—
1982 sep.	5.121	45.984	—	45.984	—
1982 dic.	-2.873	41.118	41.607	82.725	79,8%
1983 mar.	-18.280	103.667	37.548	141.215	—
1983 jun.	-26.287	126.867	36.915	163.782	—
1983 oct.	-24.288	88.603	110.804	199.407	—
1983 dic.	-31.030	92.346	109.034	121.068	161,2%

*Fuente:* Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

En 1983 no hubo reactivación después del desastre de 1982, sino una continua caída del nivel de vida. La producción bajó fuertemente durante la primera mitad del año, para después recuperarse algo en el segundo semestre. Se estima que la caída del PGB fue del orden del 0,7% para todo el año.

La desocupación aumentó todavía más en relación con 1982. En el trimestre agosto-octubre de 1983, la tasa de desempleo abierto—incluyendo a los adscritos al PEM (Programa de Empleo Mínimo) y al POJH (Programa de Ocupación Jefes de Hogar)—llegó al 30,6%, lo que significó que más de un millón de chilenos estaban sin trabajo (621.000 desocupados y 510.000 en el PEM y POJH). Las remuneraciones reales de los que habían logrado mantener sus trabajos seguían disminuyendo; entre enero y septiembre de 1983, la caída fue superior al 8%<sup>18</sup>.

La inflación se mantenía a un nivel cercano a la del año anterior, o sea un poco superior al 20%. Gracias a la drástica baja de las importaciones, el superávit de la balanza comercial se acercaba a los 1.000 millones de dólares en diciembre de 1983, lo que correspondía a casi la mitad de los pagos de interés de la deuda externa. El precio del cobre era, en términos reales, el más bajo de las últimas décadas.

Los créditos privados extranjeros, se redujeron en forma notable en comparación con los años anteriores, pero la disminución de los flujos

<sup>18</sup> GARCÍA, Rigoberto (comp.): *Economía y Política durante el gobierno militar en Chile (1973-1987)*. Ob. cit., pág. 83.

privados fue compensada, en parte, por el aumento de préstamos de instituciones internacionales y gubernamentales. Al respecto, se pueden destacar los grandes préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 548 millones de dólares y del Banco Mundial (BM) por 128 millones de dólares. Además las agencias financieras del gobierno de Estados Unidos acordaron créditos por 190 millones de dólares para importaciones desde este país a Chile.

El gobierno chileno pudo también contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, cuyas metas se cumplieron con un amplio margen de austeridad.

Pero, ¿qué quedaba de la economía moderna de mercado del laboratorio neoliberal, en 1984? No tanto a decir verdad. Es cierto que el gobierno seguía adelante con algunas modernizaciones, pero la gran mayoría de las medidas que se tomaron ese año fueron de carácter intervencionista/estatista.

El gobierno volvió a un sistema diferenciado de impuestos indirectos, con aumentos del IVA desde 20 a 30% sobre diversos artículos suntuarios.

En el sector agrícola se tomaron varias medidas de apoyo financiero a los desesperados agricultores endeudados: reprogramación de deudas, fondos de garantía para pequeños empresarios, líneas de crédito para la contratación adicional de trabajadores, etc., más el establecimiento de sobretasas arancelarias para diferentes tipos de trigo importado<sup>19</sup>.

Sin embargo, en el año 1985, se inicia un período de recuperación económica que lleva aparejado la recuperación de la coherencia del modelo neoliberal.

Los «Chicago Boys» volvieron a hegemonizar los altos mandos de la gestión económica, y el proceso de «modernizaciones» siguió adelante. Las tarifas arancelarias fueron bajadas al 15% en enero de 1988.

Pasado lo peor de la crisis, el gobierno inició una indiscriminada política de privatización. Igual que durante el gran proceso de privatización de la década anterior, la forzada privatización dio lugar a un aumento en la concentración del poder económico del país. Simultáneamente hubo una reestructuración de los grandes grupos económicos; algunos perdieron gran parte de sus imperios durante la crisis, pero otros, en cambio se beneficiaron de la desvalorización de los activos de las empresas quebradas, y salieron de la crisis más fuertes que antes.

---

<sup>19</sup> Para mayor detalle sobre las políticas económicas aplicadas al sector agrícola durante el régimen militar véase: IZQUIERDO, Alberto: «Agricultura Chilena: Gobierno, Economistas y Empresariado, 1974-1987». En GARCÍA, Rigoberto (comp.): *Economía y Política durante el régimen militar en Chile (1973-1987)*. Fondo de Cultura Económica, 1989.

En cuanto a los resultados de la política económica, como decíamos; ha habido una pronunciada reactivación económica después de la crisis. El crecimiento del PGB ha superado el 5% anual en 1986 y 1987 y las exportaciones también han aumentado. La cesantía ha bajado paulatinamente, al igual que la tasa de interés real. La inflación se mantiene en alrededor del 20%.

Algunos de los indicadores económicos más importantes de este período se representan en la siguiente tabla:

**Tabla núm. 6: Período 1984-1990**

Año	PIB (% crec. anual)	Inflación (% anual)	Desempleo (% F. de Trabajo)
1984	6,3	23	24
1985	2,4	26	21
1986	5,7	17	16
1987	5,7	22	12
1988	7,4	12	9
1990	10,0	21	6

*Fuente:* Los datos provienen de CIEPLAN (1990): Balance de Cuatro Gobiernos. Resultados económicos. Publicado en el diario *La Época*, del 20 de octubre de 1990. También de CIEPLAN (1988): «Balance económico social del régimen militar», *Apuntes*, núm. 76.

No obstante estos resultados aparentemente exitosos y que convirtieron a Chile nuevamente en «*el niño maravilla*» del Fondo Monetario Internacional se debe tener muy presente que una de las consecuencias más importantes de la aplicación de esta política económica ha sido la deficiente distribución del ingreso en el país que ha acentuado enormemente la brecha entre ricos y pobres.

En definitiva, la distribución del ingreso habría acentuado su tendencia a la regresividad, según lo demuestran las encuestas de consumo de hogares efectuadas en el gran Santiago por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, lo cual se presenta en la siguiente tabla:

**Tabla núm. 7: Distribución Relativa del consumo por hogares en Santiago**

Estrato de Ingreso	Porcentaje del Ingreso		
	1969	1978	1988
40% más pobre	19,4%	14,5%	12,6%
40% ingreso medio	36,2%	34,6%	32,6%
20% más rico	44,5%	51,0%	54,9%

## 2.4. CONCLUSIONES

Como conclusiones referidas al proceso económico, podemos mencionar lo siguiente:

- Los años de experimento neo-liberal en Chile han cambiado al país profundamente. Cuando se trata de analizar el cambio social que ha tenido lugar, puede decirse que el régimen ha tenido éxito, ya que a pesar del descontento popular generalizado, las reformas y modernizaciones han podido aplicarse de una manera ofensiva y sistemática, sin que ninguna de las fuerzas de la sociedad haya podido detenerlas. Sólo en 1983-84, cuando la crisis del modelo se agudizó y la oposición, por primera vez después del golpe militar, logró iniciar una ofensiva política en contra del régimen, el gobierno se vio obligado a ceder en materias importantes.
- Otra conclusión clara de lo sucedido en Chile es que un cambio social y económico de este carácter, con altos costos sociales y con consecuencias negativas para la gran mayoría de la población, habría sido imposible de aplicar en condiciones democráticas.
- Respecto a las consecuencias de la política monetarista antiinflacionaria aplicada en Chile entre 1973 y 1975, se debe recalcar que la distribución de los costos sociales en una recesión de este tipo es muy desigual: los costos recaen principalmente sobre los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
- Hay que señalar, también, que los conceptos de neutralidad del Estado y libre competencia, conducen entre otras cosas a una acentuación de la desigualdad social. Si la sociedad se caracteriza, como siempre lo ha hecho la sociedad chilena por una gran desigualdad económica, política y social, la pasividad del Estado y la libertad económica conllevan una concentración altísima del poder económico. El concepto neo-liberal de libertad significa, en este contexto, «la libertad del zorro en el gallinero».
- Por último hay que destacar que la política económica llevada a cabo desde 1973 trajo consigo un cambio en la estructura productiva y en la estructura de clases de Chile. La liberalización, durante muchos años, del comercio exterior, el proceso de privatización, los cambios en la distribución del ingreso y del patrimonio y con ello la nueva orientación de la demanda, los cambios drásticos en los precios relativos de los bienes y factores de producción que han tenido lugar, han contribuido a una profunda reestructuración de la economía, cuyo rasgo más sobresaliente es la baja en el sector productivo.

- Las variaciones en la estructura del empleo han sido también grandes. Como ejemplo puede señalarse que la participación del sector industrial en la ocupación total ha disminuido drásticamente.

La nueva estructura de clases que se ha desarrollado en Chile en estos años es, en resumen, bastante diferente de la existente anteriormente. El empleo en los sectores productivos ha disminuido tanto relativa como absolutamente, y desde el punto de vista político y sindical, los cambios ocurridos son de suma importancia.

La estructura de clases que existe tras los cambios impuestos durante este período se caracteriza entre otras cosas, por una atomización de grandes contingentes de trabajadores tradicionalmente bien organizados que se han convertido en desempleados o se han visto obligados a trabajar en el sector servicios. En este último sector se ha producido una creciente heterogeneización, igual que entre las llamadas capas medias, y un desplazamiento de empleados públicos hacia la empresa privada: servicios financieros y de consultoría, publicidad, computación, etc., y, especialmente, hacia el comercio y los servicios personales: vendedores callejeros, taxistas, trabajadores por cuenta propia en el sector urbano informal, etc.